



# Información Temática

---

## EL EBRO EN CATALUÑA

Por Antonio Martínez Alier y Antonio Aponte

El silencio que reina desde hace más o menos un año en torno al trasvase de las aguas del Ebro a las conurbaciones de Barcelona y Tarragona no significa que se haya solucionado el desequilibrio entre disponibilidades y demanda de agua en Cataluña ni tampoco que la burguesía catalana o la Administración Central hayan renunciado al proyecto. Estamos, sencillamente, en un compás de espera impuesto por razones estrictamente políticas. Las reacciones contra el trasvase que se produjeron tanto en Aragón como en las zonas catalanas ribereñas del Ebro dieron a entender, tanto a los políticos de la Administración Central como a los caciques de las Administraciones Locales, que, en el período de transición política que se abría, era prácticamente imposible dar luz verde a un proyecto que podría hipotecar definitivamente su futuro político. El proyecto sigue estando, sin embargo, sobre la mesa, esperando el momento oportuno para sacarlo de nuevo a la luz, que, sin duda alguna, llegará cuando unas elecciones vuelvan a permitir la recomposición de la estructura sociopolítica del país. Entonces resurgirá la cuestión del trasvase del Ebro, cuya decisión final dependerá de las nuevas relaciones de fuerza que queden establecidas tras el actual interregno político.

### El modelo de industrialización capitalista

Porque lo que se ha puesto en evidencia desde que la cuestión del trasvase salió a la luz pública es que por encima de las razones, puramente cuantitativas y técnicas, de carencia de agua, la opción del trasvase involucra en definitiva una problemática propia de un modelo de crecimiento determinado, el capitalista, y de las condiciones específicas en que ha cristalizado en Cataluña.

Esta problemática raramente salió a relucir en la polémica que, en su día, se abrió a través de la prensa. Si exceptuamos los intentos de algunas publicaciones de escasa difusión, la norma fue que en Cataluña se impusieron públicamente los argumentos de los partidarios del trasvase, basados en razonamientos de carácter pretendidamente técnico que, con el objeto de hacerlos aceptables ante la opinión pública, exacerbaban el sentimiento nacionalista en sus aspectos más acordes con la mentalidad pequeñoburguesa. La defensa de Cataluña y de su progreso económico, implícitamente identificados con el crecimiento ininterrumpido de las áreas industrializadas de Barcelona y Tarragona, fue utilizada, una vez más, en beneficio de los intereses inme-

diatos de la burguesía industrial catalana y en defensa, en definitiva, del modelo de desarrollo que ésta había impuesto.

La escasez de agua, que a partir de un momento dado se presenta en Cataluña, y más exactamente, en el Area Metropolitana de Barcelona y en el nuevo triángulo industrial **Tarragona-Valls-Reus**, no se produce solamente por un simple aumento de las necesidades, sino que es la consecuencia de una determinada política de industrialización llevada a término por una clase social que es la burguesía, predominantemente barcelonesa, que controla las estructuras industrial, inmobiliaria y financiera.

El tipo de industrialización que ha producido el modelo de desarrollo capitalista da lugar a un proceso de concentración de **inversiones**, de población y de centros de producción en núcleos determinados (que en España se localizan fundamentalmente en el litoral catalán, en el País Vasco y Madrid. ampliados actualmente al litoral valenciano), favoreciendo su desarrollo a expensas de otras zonas que son las encargadas de proporcionar mano de **obra**, recursos básicos (por ejemplo, agua y energía) y, en parte, ahorros (a través de las instituciones financieras). Al lado del profundo **desequilibrio económico** que ello ocasiona entre las distintas regiones, a partir de un momento dado aparecen, en las zonas más desarrolladas, graves problemas de congestión y saturación que se convierten en desequilibrios, en costos sociales (especulación del suelo, hacinamiento de la población, contaminación, falta de espacios verdes, problemas de transporte, etcétera), que implican el progresivo deterioro de algunos recursos naturales que llegan a hacerse escasos. El agua es uno de ellos.

### **Burguesía catalana: beneficio a corto plazo**

La escasez de **agua** a que se ha llegado en el Area Metropolitana de Barcelona viene originada directamente, en el marco general descrito, por la forma en que la industria ha hecho uso de los caudales existentes y por la normativa que la Administración Central y Local han establecido para ello. Las industrias catalanas han aplicado la ley del máximo beneficio y el mínimo coste utilizando el agua, tanto superficial como subterránea, como si fuera un bien privado e inagotable, contaminándola permanentemente con sus desechos industriales sin preocuparse en lo más mínimo de instalar sistemas de depuración, demasiado costosos según su opinión. La Administración, por su parte, no se ha esforzado en costear instalaciones de depuración de las aguas residuales de las zonas urbanas, ni tampoco ha puesto limitaciones efectivas a la contaminación industrial (los empresarios siguen prefiriendo pagar las multas de escasa cuantía a instalar depuradoras).

El resultado inevitable es que progresivamente falta más agua porque la que hay sirve cada vez menos. En ningún momento se ha previsto lo que era evidente, ni se ha puesto remedio a ello. Aparentemente esto es una muestra de irracio-

nalidad económica. En realidad es irracional desde el punto de vista social, pero desde la perspectiva de la burguesía industrial es perfectamente coherente, puesto que sirve para conseguir a corto plazo un beneficio más elevado. Con ello se demuestra, de paso, hasta qué punto están desvinculados y enfrentados intereses colectivos e intereses privados en una sociedad capitalista.

La realización del trasvase a la cuenca del Pirineo Oriental en las condiciones que pretende imponer la burguesía catalana implica seguir dando prioridad a sus intereses a corto plazo y mantener sin solución alguna los graves costos sociales que ella misma, y el sistema bajo el que se ampara, ha creado. Es evidente que sin aportar previamente soluciones a los problemas de expansión demográfica e industrial del Area Metropolitana de Barcelona, sin establecer definitivamente unas condiciones diferentes para el uso del agua y sin cambiar profundamente las orientaciones de la Administración en esta materia, traer el agua del Ebro a Barcelona sólo servirá de válvula de escape momentáneamente; los actuales problemas seguirán acumulándose hasta que más adelante vuelvan a plantearse con carácter más urgente y posiblemente tan **agudizados** que sea difícil ya introducir las rectificaciones que podrían aplicarse en los momentos actuales.

El nivel de deterioro de los bienes colectivos a que se ha llegado en Cataluña, como en el resto de la España industrializada o turística, obedece, sin duda, a las características "salvajes" del sistema capitalista desarrollado al amparo de las particulares circunstancias políticas por las que ha atravesado el país desde 1939. La dictadura política ha sido el instrumento que ha permitido a la burguesía industrial, financiera e inmobiliaria catalana realizar durante estos años una acumulación de tal calibre, sin tener frente a sí ninguna fuerza social que pudiera impedirlo, que no existe comparación posible con otros países del mundo capitalista. En Europa Occidental las condiciones de vida no se han deteriorado como aquí, no sólo porque sus burguesías respectivas puedan ser intrínsecamente más "civilizadas", sino, sobre todo, porque el nivel de "civilización" les viene impuesto por la conciencia social resultante de la acción de unas clases sociales capaces de defender abiertamente sus intereses a través de organizaciones políticas, sindicales o cívicas en general. Por tanto, la razón que hace pensar que la cuestión de la corrección de los desequilibrios hidráulicos mediante trasvases, y, en general, que la de los **desequilibrios** regionales y sociales se puede plantear en forma distinta cuando se cierre el actual período de transición política (si es para dar paso a un sistema democrático), es que entonces aquellos intereses contrarios al modelo actualmente **imperante** podrán luchar en igualdad de condiciones.

### **Industrializar contra la agricultura**

La crisis hidráulica en el triángulo industrial de Tarragona y en el Area Metropolitana de **Valen-**



cia es otro resultado de la misma mentalidad. A medida que la industrialización de la conurbación barcelonesa, aprovechando la capacidad empresarial y la estructura financiera existente, así como la especialización de la mano de obra disponible, se concentra en los sectores transformadores y manufactureros, aparece la necesidad de ampliar la capacidad industrial de base que permita la continuidad del modelo de producción. Las enormes necesidades de espacio que este tipo de industrias requiere, así como su alto índice de contaminación —especialmente en un contexto permisivo como el español—, impedían evidentemente su localización en la propia Área Metropolitana de Barcelona. Se produce así el salto a la zona tarraconense, en donde se instala un enorme complejo petroquímico, y al entorno de Valencia, en donde se instala la IV Planta Siderúrgica (Sagunto), en conexión con la fábrica de automóviles Ford, situada en Almusafes.

Cada una de las tres áreas industriales mencionadas se implantan con criterios parecidos: en su localización no se tiene en cuenta el valor agrícola de los terrenos ocupados, destrozándose unas zonas de regadío muy productivas (muy escasas en España); cuentan únicamente las ventajas infraestructurales ya existentes y, quizá todavía más relevantemente, las expectativas en cuanto a la revalorización del suelo. De hecho, la connivencia Administración-empresas privadas llega hasta el punto de que se autoriza la expropiación forzosa de todas estas zonas por vía de urgencia, lo que permite que una vez ya construidas las factorías —años después de haber ocupado los terrenos— todavía muchos de los agricultores expropiados no han cobrado el precio de sus tierras. En cuanto a las enormes necesidades de agua de estas instalaciones industriales, recurso evidentemente inexistente en las localizaciones escogidas, se planea cubrirlas con cargo al Estado: de ahí el trasvase del Ebro a Sagunto, ya en construcción, y la justificación parcial del trasvase a la cuenca del Pirineo Oriental.

### **Los trasvases proyectados**

Según los proyectos oficiales, el trasvase desde el Ebro a la cuenca del Júcar, en el que ya se han invertido más de dos mil millones de pesetas (en un tramo cuyo precio de adjudicación era cinco veces menor), aunque todavía no se ha solicitado la correspondiente concesión de aguas, derivará —en una primera fase— 600 Hm<sup>3</sup> anuales, de los cuales más del 30 por 100 están destinados directamente al servicio de la IV Planta Siderúrgica, siendo el coste de infraestructura presupuestado de nueve mil millones de pesetas. Recordemos que en el trasvase Tajo-Segura, aún sin finalizar, se ha invertido ya más de tres veces la cantidad originariamente presupuestada. Como justificaciones adicionales de este trasvase, se indican la puesta en regadío de más de 30.000 Ha. —cuya rentabilidad es más que dudosa—, así como unas necesidades de abastecimiento a la población turística, que se prevé

que aumente nada menos que el 7 por 100 acumulativo anual durante los próximos veinte años.

El trasvase Ebro-Pirineo Oriental propone trasvasar 1.400 Hm<sup>3</sup>, equivalente a casi el 20 por 100 del consumo total de agua en Cataluña en 1970, según el Ministerio de Obras Públicas, proyectándose se efectúe en una primera fase el trasvase de 840 Hm<sup>3</sup> anuales, con un coste de infraestructura presupuestado en más de 13.000 millones de pesetas (precios de 1973), más del 75 por 100 financiado por el Estado. El 80 por 100 del agua trasvasada se destinaría al abastecimiento de poblaciones y a usos industriales, quedando teóricamente el resto para riegos, en una zona que, tanto por razones edafológicas como por ser ya en muchos casos terrenos industriales, poco uso podrá hacer del agua. De los caudales trasvasados para abastecimientos urbanos e industriales, se prevé que cerca del 15 por 100 se destine a la conurbación tarraconense, destinándose el resto al Área Metropolitana de Barcelona, que ya recibe también 200 Hm<sup>3</sup> anuales trasvasados desde el Ter. Contando también el agua teóricamente destinada a riegos, la participación tarraconense alcanza el 25 por 100 del total que se prevé trasvasar. Es curioso constatar que en las previsiones oficiales de demanda en el año 2010 se proyecta un consumo medio por habitante de 285 m<sup>3</sup>/año, uniforme en toda la zona servida, de los cuales se destinaría a usos industriales el 30 por 100 en el área barcelonesa y, en cambio, más del 65 por 100 en la conurbación tarraconense.

En resumen, la ejecución de estas masivas transferencias de agua, que pueden suponer el trasvase a otras cuencas de casi el 50 por 100 de los caudales regulados en el tramo inferior al Ebro, permitiría que la proporción de la población nacional residente en el litoral mediterráneo —en los sectores centrados en Barcelona, Tarragona y Valencia— aumentara en los próximos cuarenta años en más del 60 por 100, lo que implicaría una inmigración media anual cercana al 2 por 100 de la población ya instalada en la región. No es difícil comprender los beneficios que esta situación social comportaría para los promotores de este esquema: previsible docilidad de la mano de obra, al existir permanentemente un importante porcentaje de inmigrantes recientes y, por tanto, difícilmente integrados en movimientos colectivos de reivindicación obrera, grandes oportunidades de especulación inmobiliaria, etc.

### **Nuclearización de la zona, otra cara de la moneda**

Naturalmente, estos importantísimos procesos de localización industrial comportan unas enormes necesidades de energía. El papel del Ebro es también básico en este aspecto. Debemos resaltar que la explotación energética del Ebro, planteada en términos colonialistas, se extiende a toda la cuenca, aunque el tema específico de



este artículo nos limite a tratar la problemática del Ebro catalán.

Los últimos embalses de regulación en el Ebro son los de Mequinenza y Ribarroja, propiedad de ENHER; el primero recoge las aguas procedentes de las cuencas alta y media y el segundo, que sirve de contraembalse al de Mequinenza, recoge las de la cuenca del **Cinca-Segre** y las del Matarraña. El aprovechamiento óptimo de estos embalses desde el punto de vista hidroeléctrico impide el establecimiento de un régimen de desembalse regular. Aguas abajo de Ribarroja, tras el pequeño embalse de Flix (de FECSA) se está construyendo la central nuclear de Ascó, de dos grupos de 930 MW cada uno; el primero, propiedad de FECSA, y el segundo, de esta misma empresa conjuntamente con ENHER, Hidroeléctrica de Cataluña, S. A. y Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A. En este mismo tramo del río, que cruza la comarca de la Ribera d'Ebre, están previstas las tomas de aguas para los **trasvases** (45 m<sup>3</sup>/seg., al Pirineo Oriental y 19 m<sup>3</sup>/seg., **ampliables** a 30 m<sup>3</sup>/seg., al Júcar) y la de las aguas de refrigeración de la central nuclear, prevista en circuito abierto.

El proyecto de refrigeración de esta central, actualmente en sus últimos trámites de concesión administrativa, supone la **utilización** de 76 m<sup>3</sup>/seg. en caudal continuo, que equivale al 50 por 100 del caudal regulado total. Hemos ya mencionado que la **utilización** hidroeléctrica de Mequinenza y Ribarroja hace que en la **práctica** el caudal realmente circulante sea a menudo mucho menor. Las tomas de los trasvases y la toma de las aguas de refrigeración de la central nuclear se efectuarían desde embalses en el cauce, que están actualmente en estudio por la Administración y por Hidroeléctrica de Cataluña, S. A., empresa concesionaria del aprovechamiento hidroeléctrico de este tramo. Existen varias hipótesis en consideración que podemos resumir como sigue:

— Construcción de una única presa en **Cherta**, absorbiendo, eventualmente incluso, la de Flix; implicaría la destrucción total de la huerta de la comarca (unas 5.000 Ha.), inundación de la mayoría de los pueblos y emigración forzosa de cerca de 25.000 personas.

· Construirán de dos presas, aguas abajo de Flix, en García y Cherta. Desde la última está previsto se capte el agua para el trasvase al Júcar y desde la de García se tomaría el agua para la central nuclear de Ascó, que se vertería de nuevo al embalse; las aguas trasvasadas al Pirineo Oriental se bombearían también desde el **embalse** de García o desde el embalse de Cherta, situado aguas abajo del **anterior**.

En cualquier caso, para elevar el agua **trasvasada** se prevé la instalación de centrales **reversibles** del bombeo y turbinado en ambas márgenes, que serán naturalmente explotadas por las mismas empresas que son propietarias del resto de las instalaciones energéticas de esta zona. Estas centrales reversibles bombean durante las horas de bajo consumo energético (72 horas semanales) una cantidad de agua cuatro veces su-

perior a la realmente trasvasada, devolviendo el sobrante al río, produciendo electricidad durante las horas punta (24 horas semanales). Las centrales nucleares producen de forma constante; su combinación con centrales reversibles **rentabiliza** considerablemente su producción. En el caso de Ascó este esquema es todavía mucho más interesante para las empresas propietarias: no hay pérdidas en transporte y además la financiación de la instalación y los costes de explotación estarán, al menos en parte, a cargo del Estado y de los consumidores.

### **Costes sociales del esquema**

Los costes sociales de este esquema son enormes, como corresponde a la tónica general a la que nos hemos venido refiriendo anteriormente. Los inconvenientes ecológicos y la evidente peligrosidad que implica la instalación nuclear utilizando agua dulce para su refrigeración, en un país en que este recurso es muy escaso, son obvios. En este caso, además, el problema se multiplica por el disparatado sistema propuesto:

Las aguas utilizadas en la refrigeración, que aún en funcionamiento normal acarrearían una cierta concentración de isótopos radiactivos, se verterían en un embalse donde estos se sedimentarían. Desde este mismo embalse, o desde otro situado inmediatamente aguas abajo, estas mismas aguas se captarían para su trasvase abasteciendo las necesidades totales de **5.000.000** de personas, sin que se haya estudiado cuál sería la concentración radiactiva de las aguas trasvasadas que, al menos en épocas de estiaje, puede ser mayor que la emitida por la central.

— No se ha estudiado tampoco cuál sería la dosis de radiactividad máxima absorbida por la población ribereña, teniendo en cuenta todos los caminos de exposición: contaminación atmosférica, uso directo de las aguas, transmisión a través de las cadenas alimenticias. En ningún otro país en el que se instalan centrales nucleares sería admisible su construcción sin cumplir previamente con este requisito básico.

Tampoco se prevé ningún sistema que impida la circulación por el cauce y consiguiente contaminación de las aguas superficiales y **subálveas** y la inevitable evacuación —posiblemente permanente— de los 150.000 habitantes del Bajo Ebro, en caso de fuerte concentración **radiactiva** de las aguas utilizadas en la central nuclear, a causa de accidente, avería o descuido; este tipo de accidentes es relativamente habitual. La Administración reconoce este peligro imponiendo incluso la constitución de unas reservas de agua fuera del cauce para seguir abasteciendo los trasvases en esta eventualidad —que en realidad no serían más que los embalses superiores de las centrales reversibles que, como hemos visto, forman ya parte del esquema proyectado—, aunque, en cambio, no se preocupa de lo que pueda ocurrir en las tierras ribereñas.



— La construcción de presas en el cauce, además de los perjuicios que ocasionaría en la comarca de la Ribera (que en el caso de construcción de dos presas escalonadas en lugar de una sola serían menores en cuanto a inundación física, pero del mismo orden en cuanto a sus consecuencias socioeconómicas), agravaría los desequilibrios ecológicos en el delta, uno de los más extensos y fértiles del Mediterráneo, ya notables a causa de la existencia de las grandes presas de Mequinenza y Ribarroja. El sistema irregular de aprovechamiento hidroeléctrico del conjunto de presas en el cauce y de centrales reversibles, que alcanzaría su óptimo al utilizarse como modulador de la producción de la central nuclear de Ascó, acabaría de desregular los caudales circulantes aguas abajo. Las consecuencias, a mayor o menor plazo, para todas las tierras del Ebro catalán, serían enormemente perjudiciales.

### La reacción de las comarcas afectadas

Todo este conjunto abrumador de problemas ha ido produciendo una toma de conciencia progresivamente creciente en las zonas más directamente afectadas, que ha dado lugar a una lucha, quizá no siempre evidente para el gran público, pero que empieza a alcanzar algunos resultados. Las acciones emprendidas tuvieron en principio dos polos muy diferenciados, que respondían a motivaciones diferentes y que, por la diversa calificación de sus actores, han conducido campañas de oposición de carácter no siempre coincidente.

Por una parte, las entidades oficiales del Baix Ebre y Montsià (que comprenden la zona del delta, situada aguas abajo de todos los aprovechamientos previstos) organizaron una fuerte oposición al proyecto de trasvase Ebro-Pirineo Oriental, al ser presentado a información pública a principios de 1974. Sus alegaciones, con una razonable base técnica, se fundamentaban en la escasez de los caudales disponibles en el delta, una vez se derivaran las aguas previstas. Su actitud respecto a la presa de Cherta fue —y sigue siendo— ambivalente, y su oposición al trasvase del Júcar y a la refrigeración en las condiciones propuestas de la central de Ascó nunca ha alcanzado la intensidad con que, en su día, se opusieron al trasvase a Tarragona y Barcelona. Su actuación se ha mantenido siempre en cauces oficiales, y aunque, indudablemente, existe una oposición popular a estos proyectos, ésta aún no se ha estructurado ni manifestado claramente.

La actuación en la Ribera ha sido muy diferente. Las autoridades locales carecían de la fuerza y de las conexiones políticas en las que se apoyaron las del delta. En cambio, existía una vieja sensibilidad popular frente a las presas de Cherta y García: la concesión administrativa para su construcción data de 1904 y los proyectos resucitan de vez en cuando; en 1960 se organizó un fuerte movimiento popular que alcanzó un notable éxito.

El instrumento principal de la defensa colectiva fue entonces un estudio técnico (primer trabajo realizado por una empresa consultora, actualmente muy conocida por sus encuestas de opinión política y estudios económico-industriales) que valoraba las tierras inundables en función de su rentabilidad agrícola; HEC, S. A. (compañía concesionaria) reconsideró su análisis económico de la inversión y aplazó una vez más sus planes.

En febrero de 1974 se presentó a información pública el anteproyecto de trasvase Ebro-Pirineo Oriental, en el que se insinuaba la oportunidad de construir una gran presa en Cherta. Se reconstituyó rápidamente la vieja estructura que, ya consolidada, agrupa ahora a 1.400 habitantes de Ribera d'Ebre, la mayoría pequeños propietarios agrícolas, que actúa bajo el nombre de CARE. La acción se ha ampliado a una oposición general al esquema de aprovechamiento conjunto que hemos descrito anteriormente, ya que se ha podido comprobar su indudable interconexión; aunque las presas de Cherta y García (acogidas desde marzo de 1975 a los beneficios de la acción concertada: créditos del 40 por 100 de la inversión, incluyendo expropiaciones, al 7 por 100 a 15 años, entre otras prebendas) siguen siendo preocupación fundamental, se ha despertado también la conciencia comarcal ante los peligros que siempre implica la construcción de una central nuclear que en este caso ha ocasionado, ya en la fase de construcción, la destrucción de más del 5 por 100 de las tierras de regadío comarcales, el abandono de cerca de 1.500 Has. de secano, una disrupción total del mercado de trabajo, que implicará forzosamente la emigración de una parte considerable de la población comarcal una vez acabe la fase de construcción de obra civil, y una amarga división en la comarca, que ha durado desde que se iniciaron las obras en 1972 hasta hace escasos meses; luego vendrán los riesgos del funcionamiento. En España éstos se agravan enormemente debido a la escasa efectividad del control que la Administración ejerce sobre la construcción y el funcionamiento de las centrales nucleares; y en particular, en este caso, el emplazamiento, el proyecto y la realización —hasta ahora— hacen temer graves consecuencias para el ecosistema ribereño. CARE ha basado también en esta ocasión su defensa en una serie de estudios técnicos (además de las acciones legales oportunas) propugnando incansablemente la participación de la Administración provincial en estos trabajos, por entender que es la estructura administrativa más capacitada, financiera y políticamente, para conseguir los resultados que pretende a corto plazo: lograr la paralización temporal de todas las realizaciones que puedan tener consecuencias irreversibles, dando tiempo a que un equipo técnico adecuado, financiado por la Diputación y controlado por las organizaciones real o nominalmente representativas de las comarcas afectadas, pueda analizar los costes y beneficios sociales tanto de las variantes oficialmente consideradas del esquema de aprovechamiento con-

junto, como de otras que fueran menos perjudiciales para la zona. Se confía con ello poder llegar a definir y cuantificar las opciones alternativas técnicamente admisibles, en función de su utilidad colectiva. de forma que puedan, en su día, escogerse las más convenientes de acuerdo con su utilidad social, evitando la justificación, con argumentos demagógicos, de esquemas escogidos por su rentabilidad para algunos intereses privados. Dada la complejidad del tema y el hecho de que la gestión del agua implica a intereses mucho más vastos que los controlados o representados por la Diputación de Tarragona, este estudio analítico se efectuaría en función de una escala de hipótesis en cuanto a la cantidad de agua exportada, cuyo coste de oportunidad en los depósitos de salida se valoraría para cada esquema alternativo de aprovechamiento considerado.

A las acciones iniciadas por CARE se han unido recientemente las autoridades oficiales comarcales, espoleadas tanto por el espíritu **pre-democrático** de esta época, como por el progresivo reconocimiento de las razones y de la personalidad de CARE, al nivel de la Administración provincial y central.

### **Conclusión**

La evolución de los acontecimientos y de las posiciones durante estos últimos meses permite pensar, por tanto, que la burguesía industrial y financiera catalana va a tener que poner en juego argumentos más sólidos que los esgrimidos hasta ahora para poder vencer una creciente concienciación popular que está cada vez menos dispuesta a renunciar a sus legítimos derechos.

Este espíritu de lucha que manifiestan los habitantes de las tierras del Ebro se inserta en la cada vez más evidente decisión de las clases populares de Cataluña de resarcirse de la explotación a la que están sometidas, y de una u otra forma puede significar el fin del período de "acumulación salvaje" del que ha disfrutado la burguesía catalana bajo el franquismo.

Por otra parte, creemos es interesante resaltar, teniendo en cuenta la audiencia natural de este papel, que una de las causas probables del relativo éxito alcanzado hasta ahora por CARE es el rigor técnico de las posiciones mantenidas por esta organización.

Esto ha sido posible por la colaboración de un importante equipo de destacados profesionales en distintas especialidades, en algunos casos voluntaria y en otros contratada con fondos recaudados entre los miembros de CARE o mediante subvenciones que los mismos asesores de CARE se han cuidado de conseguir. Nos consta que existen actualmente en España abundantes profesionales que ven con disgusto las prácticas del capitalismo a la *española* y que están dispuestos a participar activamente en movimientos de defensa popular; sin embargo, no son muy numerosos los profesionales (con la excepción de los abogados laboristas) que dediquen sus conocimientos técnicos al servicio de causas colectivas concretas, no directamente políticas. Además, entre los que mantienen, más o menos ocasional o permanentemente, este tipo de actividades se observan a menudo tendencias **pater-nalistas** y algunas veces utilidades personalistas y, casi siempre, absoluta descoordinación, falta de comunicación e incapacidad de colaboración interdisciplinaria. La gravedad de la situación, sabiamente expresada en el documento publicado por la Asamblea de Catalunya relativo a las agresiones al medio ambiente con el lema de "Salvem Catalunya per a la democracia", debería penetrar la conciencia de técnicos y profesionales, haciéndonos ver nuestra parte de responsabilidad en estos procesos y llevándonos a una organización efectiva de nuestras acciones, descartando divismos inoportunos y perjudiciales.

#### **NOTAS:**

Las cifras relativas a los trasvases han sido elaboradas, en general, a partir de datos contenidos en publicaciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas.

Se recomienda la lectura del número monográfico de "CAU" dedicado al trasvase (núm. 32, julio/agosto 1975) y del número extraordinario de "Doblón" referente a la estructura socioeconómica de Cataluña (núm. 4, julio 1976).